

## DECLARACIÓN

**D**e acuerdo con el Magisterio del Papa Francisco, con las declaraciones de los líderes de las principales religiones y de los alcaldes de las más importantes ciudades del mundo, afirmamos que la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos, son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales. Asimismo, el crimen organizado que mira directa o indirectamente a expandir la esclavitud moderna en sus formas antes descritas, también debe ser considerado un delito de lesa humanidad y reconocido por tal.

Los abajo firmantes nos hemos reunido en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales para abordar del mejor modo posible por parte de los representantes de la justicia este dramático reto.

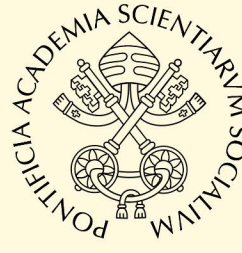
La eliminación de la esclavitud moderna hoy es un nuevo imperativo moral para los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, según rezan los recién aprobados (septiembre de 2015) *Objetivos de desarrollo sostenible* (Meta 8.7).

La aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para “erradicar el trabajo forzado, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados”. Esto implica asimismo ayudar a remediar las consecuencias sea para las víctimas sea para la sociedad. Es evidente que la justicia penal está intrínsecamente ligada a la justicia social, y a su vez la justicia social a la justicia ambiental. Como afirma la Encíclica *Laudato si'*, “hoy no podemos dejar de reconocer que *un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social*, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar *tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres*” (§ 49). Rehabilitación, reasentamiento y reintegración tienen por objeto liberar a las víctimas de la esclavitud moderna y de la trata de personas, como asimismo restaurar su dignidad humana y su capacidad de ser social y económicamente independientes. No corriendo más el riesgo de recaer en la trata o de recurrir a actividades ilegales y deshumanas, los sobrevivientes pueden contribuir así positivamente al bien de la sociedad.

### Con tal propósito, suscribimos los siguientes 10 objetivos:

1. Promover en cada estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional con el fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas para los criminales con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de los derechos humanos.
2. Habiendo sido aprobados los *Objetivos de desarrollo sostenible* de las Naciones Unidas y ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata de personas, todas las naciones tienen que reconocer la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado y la prostitución como crímenes de lesa humanidad con penas proporcionadas.
3. Los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.
4. Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una protección segura de los testigos, la asistencia médica y el sostén a las personas por parte de las agencias de servicios sociales, especialmente en el caso de las víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración con la justicia de las víctimas como testigos, también a través de la protección segura y profesional de los mismos con programas de protección organizados a nivel internacional.
5. En el caso de víctimas indocumentadas, emanar autorizaciones de residencia temporal en el país de destino para los que deseen permanecer en éste, independientemente de su situación legal. Garantizar el acceso efectivo a los tribunales pertinentes, a la asistencia jurídica gratuita, y el acompañamiento hasta la reinserción laboral efectiva.
6. Alentar esfuerzos concertados para reducir las prórrogas al acceso a la asistencia legal por parte de las víctimas reconocidas de esclavitud moderna.
7. El tráfico de órganos, definido y condenado por la *Declaración de Estambul* (2008), debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido eficazmente por la justicia en los ámbitos nacionales e internacionales. Asimismo junto con ser ilegal tal actividad debe ser también reconocida como típica de las organizaciones criminales internacionales.
8. La sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que quien emplea a sabiendas trabajo forzado.
9. Las víctimas de trata no deben confundirse con los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto de tráfico.
10. La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y de las actividades ilegales y deshumanas.

Francisco



## DECLARATION

In accordance with the Magisterium of Pope Francis, the declarations of the leaders of the main religions and of the mayors of the major cities of the world, we affirm that modern slavery in terms of human trafficking, forced labour and prostitution, and organ trafficking are Crimes against Humanity and should be recognised as such. Organized crime that aims directly or indirectly at expanding modern slavery in its abovementioned forms must also be considered a Crime against Humanity.

We the undersigned have assembled at the Pontifical Academy of Social Sciences to address how representatives of the Judiciary can best face this daunting challenge.

Today, the elimination of modern slavery is a new moral imperative for the 193 Member States of the United Nations, according to the Sustainable Development Goals (SDG 8.7) approved in September 2015.

The effective application of criminal law is a necessary condition to “eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers” (SDG 8.7), and to help remedy its consequences for victims and society. Criminal justice is intrinsically linked to social justice, which in turn is linked to environmental justice. The Encyclical *Laudato si'* affirms that, “Today we have to realize that a true ecological approach *always* becomes a social approach; it must integrate questions of justice in debates on the environment, so as to hear *both the cry of the earth and the cry of the poor*” (§ 49). Rehabilitation, resettlement and re-integration aim to free the victims of modern slavery and human trafficking and restore their human dignity, enabling them to become socially and economically independent. Only when they are no longer at risk of being re-trafficked or compelled to resort to illegal and humiliating activities, can they contribute positively to society.

### To this end, we endorse the following 10 goals:

1. To encourage each state to increase resources and international judicial and police collaboration in order to raise low prosecution and conviction rates for criminals, strengthening supranational institutions for the fight against traffickers and the protection of human rights.
2. Having approved the UN Sustainable Development Goals and ratified the 2000 UN Protocol Against Trafficking in Persons (Palermo Protocol), all nations must recognize modern slavery, human trafficking, and forced labour and prostitution as Crimes against Humanity with commensurate sentences.
3. Assets seized from convicted traffickers and criminals must be devoted to victim rehabilitation and compensation, and making reparations to society. The crime of money laundering must be severely prosecuted, because it is the process of transforming the proceeds of crime and corruption into ostensibly legitimate assets.
4. Advocate the provision of adequate victim support including civil and legal aid, secure witness protection, medical assistance and support for individuals from social service agencies, especially in the case of undocumented victims. Encourage collaboration of the victims with the judicial system as witnesses, offering safe, professional witness protection by means of international protection programs.
5. In the case of undocumented victims, the issuing of temporary residence permits in the country of destination, for those wishing to remain there, regardless of their legal status in that national territory and including effective access to relevant courts and tribunals, access to free legal assistance, and job training aimed at reinsertion into the labour force.
6. Encourage concerted efforts to reduce delays in accessing legal support for identified victims of modern slavery.
7. Organ trafficking, as defined and condemned in *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism* (2008), must be recognized as a crime in all countries and be effectively legally prosecuted at the national and at the international level. As well as being illegal, this activity must also be recognised as prevalent among international criminal organizations.
8. Prosecution of clients of commercial sexual services should become an integral part of anti-slavery and anti-trafficking legislation as should the knowing employment of forced labour.
9. Trafficked persons should never be confused with non-trafficked irregular migrants, nor being smuggled with being trafficked.
10. Repatriation of undocumented foreigners should never be the default judgement upon victims, in order to avoid the risk of their being re-trafficked or resorting to illegal and humiliating activities.